

CUANDO SE DEBE ENFRENTAR LA EPIDEMIA “SIN ESTADO”: BOLIVIA ANTE EL CORONAVIRUS

Fernando Molina

7 de abril de 2020

Introducción

Según un ranking de la consultora Oxford Economics, Bolivia es, de 31 países emergentes analizados, el más vulnerable ante el impacto de la epidemia de coronavirus (Tolosa, 2020). La medición combina tres indicadores: la capacidad del sistema de salud, la solvencia fiscal y la mayor o menor dependencia de cada economía de las actividades económicas más golpeadas por la pandemia, tales como el turismo, el petróleo y la minería.

La capacidad del sistema de salud para responder al desafío de la epidemia ha sido inferida de la relación entre la debilidad o fortaleza intrínseca del mismo —calculada por número de camas hospitalarias y de médicos por cada 100.000 habitantes—, y del peso que tienen los mayores de 70 años en la población total. El estudio indica que existen 11 camas de hospital y 16 médicos por cada 100.000 bolivianos; esto significa menos camas que en cualquier otro país latinoamericano considerado en el estudio, y menos médicos que en la mayoría de ellos, excepto

Paraguay, Costa Rica e, increíblemente, Chile, que solo tiene 11 doctores por cada 100.000 habitantes. Cuestión distinta es la calidad de estos médicos, que, por supuesto, queda por fuera de este u otros rankings. Por otra parte, los ancianos son el 4,9% de la población de Bolivia (medio millón de personas), un porcentaje parecido al de otros países de ingresos medio-bajos y muy inferior al que exhiben los países emergentes europeos.

La vulnerabilidad boliviana es también muy importante en la categoría de capacidad o, como gusta decir este estudio, de “espacio” fiscal: “espacio” para tomar las medidas que requiere una economía en cuarentena, se sobrentiende. Pues bien, Bolivia tiene muy poco de este “espacio” porque viene sufriendo cuatro años de altos déficits fiscales, como resultado de la caída, en 2015, de los precios de las materias primas que vende al extranjero. En 2019, el déficit representó el 8% del producto interno bruto. En cambio, el endeudamiento del Estado no es excesivamente alto, puesto que asciende so-

lamente a algo más de la mitad del producto.

Por último, la economía boliviana adolece de una altísima dependencia de la venta de materias primas, que constituyen más del 90% de sus exportaciones. Ahora bien, no hay duda de que las materias primas perderán su valor en el contexto de una grave recesión mundial como la que se espera para este año. Por tanto, sumando todos los factores, puede anticiparse que el país no contará con suficientes recursos para pagar a sus ciudadanos los sacrificios que están realizando al dejar de ir a trabajar para contener la epidemia, ni tampoco podrá reactivar las actividades que resulten más afectadas por el parón productivo. También puede anticiparse que el daño humano que cause la infección será mucho mayor al que podría haber causado en otras condiciones económicas y sociales.

Esta mirada resulta bastante desesperanzadora, pero no capta del todo la verdadera gravedad del problema. Para hacerlo se necesita tomar en cuenta, adicionalmente, asuntos tales como la evaluación cualitativa del sistema de salud —que se relaciona estrechamente con el tipo de estructura estatal existente— y, también, las peculiares condiciones políticas en las que la epidemia ha encontrado al país: metido en unas elecciones generales, con un gobierno que acababa de asumir y que debía marcharse pronto; con una presidenta, Jeani-

ne Áñez, que a la vez es candidata; y, además, tensionado por una fuerte polarización social. En este artículo desarrollaremos todos estos temas.

La reacción inicial ante el brote en China

A principios de febrero, aún había esperanzas de que la enfermedad que estaba causando tantas desgracias en China no llegara a Bolivia, pese a que las conexiones entre el país y la potencia asiática se habían multiplicado en las décadas precedentes. Durante este siglo, como se sabe, China se ha convertido en el principal proveedor de bienes de los países latinoamericanos, y también en uno de los más importantes compradores de sus materias primas. Sin embargo, Bolivia ha seguido siendo una economía relativamente aislada. Debido a su mediterraneidad, al tamaño de su mercado y a su súper-especialización en la venta de unas pocas materias primas, el país no ha participado más que marginalmente en los grandes intercambios comerciales intercontinentales. Finalmente, la epidemia no llegó a Bolivia desde Asia, sino desde Europa, continente con el que los lazos del país están mucho más ramificados y son abundantes.

En este primer periodo, el gobierno de Jeanine Áñez anunció que estaba tomando medidas para dotar a los laboratorios estatales de los reactivos necesarios para hacer los test de la COVID-19. También recibió, como

donación de la embajada china en La Paz, unos cuantos termómetros para controlar la temperatura en los aeropuertos, aparatos que tuvieron entretenidos, por un rato, a los medios de comunicación.

El 6 de febrero surgió la sospecha de la existencia de un primer caso importado de China, que finalmente se descartó. Los medios y los políticos comenzaron a hablar de los posibles impactos de un brote en el país, pero en términos hipotéticos y optimistas, pues nadie creía, en ese entonces, que la enfermedad arribaría tan rápidamente y con tanto impacto como lo ha hecho. La preocupación que despertaba el coronavirus en ese momento era más económica que sanitaria, ya que los mercados financieros internacionales habían estado cayendo y el precio del petróleo había mostrado una tendencia a la baja. Este dato resulta clave para Bolivia, pues la principal industria nacional es la extracción de gas natural, producto que se vende a Brasil y Argentina a precios vinculados al costo internacional del barril de crudo.

El resto del mes de febrero, las autoridades de salud fueron descartando varios casos sospechosos. El ministerio del ramo hizo declaraciones esperanzadoras sobre la progresiva preparación del país para enfrentar el desafío, pero no dejó constancia de las mismas. En todo caso, el riesgo todavía era hipotético, ya que no había

habido ningún caso comprobado en Latinoamérica.

Aunque la nueva enfermedad estaba presente en el debate público nacional, este se hallaba concentrado en las vicisitudes del proceso electoral fijado para el 3 de mayo, y en los cambios que entonces estaba introduciendo —en el aparato del Estado y en las políticas públicas— el gobierno que acababa de llegar al poder (el 12 de noviembre de 2019). Hablaremos de ello más adelante.

El 25 de febrero se presentó el primer caso latinoamericano de coronavirus en Brasil. Lo alarmante del asunto estaba en que, a esas alturas, los servicios de salud y las autoridades no parecían haber establecido protocolos y procedimientos efectivos de atención para los futuros afectados por una enfermedad muy contagiosa y, por tanto, difícil de contener. Muchos albergaban, en silencio, la sospecha de que el personal médico y sanitario, que nunca se había destacado por su eficiencia, tampoco ahora estaría a la altura de las necesidades.

No había información oficial sobre algunos puntos cruciales, tales como el número de máquinas respiradoras que había en el país para atender a los enfermos con complicaciones, o la cantidad de test que se podían realizar. La realización de las pruebas estaba circunscrita a un solo laboratorio en Santa Cruz, y los resultados

se presentaban dos o más días después de realizada cada prueba. Tales hechos no aparecían entonces como graves porque los pacientes sospechosos eran pocos.

Comenzaban a circular en los medios, sin que fueran parte de una estrategia comunicacional oficial, mensajes orientados a evitar que las personas se saludaran con besos o estrechándose las manos, como era la costumbre; que se lavaran constantemente las manos, y que no salieran de sus casas, en especial los mayores de 65 años. La comunicación gubernamental estaba centrada en elogiar la decisión de la presidenta de destinar el 10% del presupuesto nacional a la salud, una medida que se había adoptado previamente y sin relación específica con la amenaza de epidemia. El gobierno también difundía que su principal preocupación en el campo de la sanidad era, de inmediato, el pico alcanzado por la epidemia de dengue, que azotaba el oriente del país.

Un gobierno de transición

El gobierno al que le ha tocado en suerte lidiar con la crisis del coronavirus es uno de transición, que no ha sido electo por voto popular, y que, se suponía, debía ocuparse solamente de convocar elecciones en el tiempo más breve posible. El país había estado, previamente, y durante 14 años, bajo el mando carismático y caudillesco de una de las principales figuras izquierdistas de su historia, Evo Mo-

rales. Este había sido derrocado, en noviembre de 2019, por un levantamiento de la clase media, luego de haber sido acusado de fraude en las elecciones del 20 de octubre del mismo año (Saltalamacchia, 2020).

Sin embargo, las causas de la “rebelión de las ciudades” eran más. Estaba el malestar causado por el sistemático intento de Morales de perpetuarse en el poder, pasando por encima de las normas constitucionales orientadas a garantizar la alternancia y a equilibrar un sistema político férreamente presidencialista. Y estaba, también, la protesta de las élites tradicionales por el recorte de sus privilegios raciales, culturales y políticos durante el gobierno de Morales (Stefanoni y Molina, 2019).

La insurrección triunfó cuando logró comprometer a policías y militares, y sumarlos a la presión sobre el presidente para que renunciara, lo que fue interpretado por la izquierda como un “golpe de Estado” (Marsteintredet y Malamud, 2020).

El gobierno de Jeanine Áñez surgió de la confusa situación legal causada por la salida de Morales del poder, pero, lo que es mucho más importante, encarnó la voluntad política de los poderes fácticos del país, a saber:

1. Las clases medias movilizadas en contra del Movimiento al Socialismo (MAS), guiándose por una ideología formalmente pro-democrática pero,

en sustancia, restauradora del orden previo a la “revolución plurinacional” que había realizado el MAS; un orden en el que no se producían cuestionamientos a la primacía de los bolivianos blancos en la vida cotidiana ni se ponía en duda el predominio político de los estratos sociales mejor educados (y, por tanto, más ricos).

2. Los organismos estatales armados. Estos respaldaron al nuevo gobierno porque habían sido partícipes del levantamiento contra Morales y, en consecuencia, estaban interesados en la consolidación del nuevo orden de cosas; y porque de todas maneras sociológicamente están más próximos a las clases medias insurrectas que al MAS.

3. El aparato judicial. Los fiscales y jueces habían sido designados por el gobierno anterior, pero, en un ejemplo sin parangón de pragmatismo, han terminado alineados por completo con las nuevas autoridades, que los han usado instrumentalmente para operar una dura y amplia persecución judicial hacia los jefes del MAS. Esta persecución es una concesión populista al ánimo revanchista de las clases medias.

4. Los medios de comunicación, pues sus propietarios y su personal también forman parte del “nuevo bloque social” que ha ocupado el poder (Molina, 2020).

Gracias a esta condición política de los poderes fácticos, el de Áñez nunca ha tenido que comportarse como un gobierno “de transición”, abocado exclusivamente a organizar las nuevas elecciones, tal como las leyes exigían. En lugar de esto, ha acometido cambios fundamentales en la orientación de las políticas públicas *en todas las áreas*. Desde el punto de vista de la contención médica y económica de la epidemia del coronavirus, interesa la purga de miles de funcionarios de los ministerios y las dependencias estatales, y su reemplazo por personal nuevo. Esta ha sido la práctica usual en un país muy pobre en el que los mejores (y, en muchos casos, los únicos) empleos existentes son los que ofrece el Estado. En el pasado inmediato, la rotación del personal burocrático había quedado un tanto limitada por la permanencia de Morales en el poder, que constituyó un récord histórico, pero no se detuvo ni siquiera entonces. Como es lógico, se ha hecho frenética con el retorno de las élites restauradoras a la cúspide del sistema político. El impacto que esta acción ha podido haber tener sobre la capacidad del Estado para actuar de manera coordinada frente al coronavirus no puede calcularse concretamente, pero sin duda existe.

Por otra parte, está la cuestión de la candidatura de la presidenta Áñez, lanzada a fines de enero de 2020. El 67% de la población se oponía a la misma en ese momento, según una

encuesta (Aguilar, 2020). Algunos de los reclamos que se hacían contra Áñez eran los siguientes: a) su participación en el derrocamiento de Morales; b) que se haya “autoproclamado” presidenta (este verbo hace referencia al hecho de que su nominación no salió de una reunión con suficiente quorum de la Asamblea Legislativa); c) el incumplimiento de su promesa inicial de no postular, y, sobre todo, d) que actúe simultáneamente como gobernante y candidata, una conducta similar a la ejercida por Evo Morales en el pasado, lo que le resta sentido al movimiento orquestado en contra de este, y que Áñez aspira a liderar.

¿Cuáles son los efectos de estas críticas en la habilidad de la presidenta para contener la epidemia? Los partidos la ven como competidora, y una parte de la población como “usurpadora” y “falsa”. Ella no ha querido incorporar a los demás candidatos a su trabajo contra el virus. Luis Arce, el candidato del MAS; Carlos Mesa, el candidato de centro, y Luis Fernando Camacho, el candidato de extrema derecha, han expresado críticas más o menos abiertas a la gestión gubernamental de la crisis. Los equipos de campaña de estos partidos han propuesto que la presidenta renuncie a su postulación electoral para que pueda ocuparse exclusivamente de la crisis.

Al mismo tiempo, a principios de abril, la mayoría de la población

aprobaba el manejo de la situación por parte de Áñez, según una encuesta preparada por la empresa CIESMORI. El 51% consideraba que la gestión estaba siendo buena o muy buena; el 15% regular, y un 34% que era mala (Ortiz, 2020). Sin embargo, hay que anotar que esta encuesta, que fue aplicada online, posiblemente sobrerrepresente la opinión de las clases medias, la parte de la sociedad más proclive al gobierno.

La irrupción del virus

Finalmente, el 11 de marzo dos bolivianas, ambas relacionadas con Italia, dieron positivo de la COVID-19. En ese mismo instante, la ilusión sobre la preparación del sistema y el control se desmoronó. La primera enferma, una mujer de más de 60 años que vivía en la pequeña ciudad de San Carlos, distante a 110 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, fue hostigada por sus vecinos, que la querían echar del pueblo. Se la trasladó a la capital, pero no pudo ser internada porque los trabajadores de cuatro hospitales de Santa Cruz, en “alianza” con algunos vecinos de esos centros, lo impidieron. La mujer estuvo dando vueltas en la ambulancia que la transportaba y, finalmente, tuvo que quedarse en un sitio improvisado por la Gobernación de Santa Cruz durante varios días.

El “motín” de los salubristas duró un tiempo y luego continuó subterráneamente. Para poder conjurarlo, las autoridades habilitaron edificios que

no estaban en uso, como centros de internación, en casi todos los casos con oposición de los vecinos, y también concentraron la atención de los enfermos más graves en determinados hospitales. Pero la reticencia del personal de salud sigue hasta hoy, y se ha convertido en el principal problema sanitario del país. Médicos de hospitales en los que ha circulado el coronavirus se han auto-aislado sin ninguna justificación objetiva. La asociación de intensivistas (los doctores especializados en la administración de los respiradores) ha advertido que sus afiliados no podrían tratar a los pacientes de la COVID-19. Las clínicas privadas se han negado a atender esta patología. Unos y otros arguyen la falta de condiciones y de equipamientos de bioseguridad, lo que a veces es cierto y otras no.

Las deficiencias del sistema, que parecen más graves en La Paz, quedaron al desnudo ante la población con la trágica suerte que corrió Richard Sandoval, un hombre de 50 años y sin enfermedades crónicas, que murió sin poder recibir terapia intensiva pese a los desesperados esfuerzos de su familia para conseguir que le conectaran un respirador. Este hombre era apenas el sexto caso de coronavirus en el país, de modo que su abandono no se debió a la falta de espacio en los hospitales, o la falta de respiradores, sino a la desorganización y, sobre todo, a la indolencia y cobardía del personal de salud.

Como en todas partes, los puntos débiles de la lucha boliviana contra la epidemia son dos. La atención de los casos severos y la administración de test. En este último aspecto las carencias son también enormes. El país solo está testeando a los pacientes sospechosos, es decir, a los que ya presentan síntomas. Únicamente se han hecho 800 pruebas hasta este momento (5 de abril de 2020). Aun así, hay varias denuncias de que el servicio no ha sido prestado a las personas que lo solicitaron. Y tan solo en los últimos días se han comenzado a montar, con ayuda de la cooperación internacional, laboratorios en otras ciudades del país, aparte de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Gracias a una donación china, ha llegado material para 20.000 pruebas, aunque si se realizan al máximo ritmo de trabajo tan solo durará 10 días. A causa de la falta de diagnósticos, la tasa boliviana de letalidad del coronavirus es, a 4 de abril, muy alta: 6,3%.

El recurso (no muy sostenible) del confinamiento

Debido a la debilidad del sistema de salud, la única arma efectiva con que cuenta Bolivia para amortiguar el impacto de la epidemia es la cuarentena. Aquí la cuarentena no solo busca mantener los servicios médicos despejados, sino que funciona, en los hechos, como un mecanismo de supresión de la necesidad de usar estos servicios (cuya respuesta no es posible prever). Esto induce al gobierno

y a decenas de miles de ciudadanos “hipocondriacos” —o simplemente bien informados— a absolutizar y radicalizar la medida. Coincidentemente, un estudio de Google ha detectado que los usuarios de celulares inteligentes han estado cumpliendo las normas de cuarentena casi al 100%. El estudio asume, incorrectamente, que se trata de todos los bolivianos. En realidad, se trata de los sectores más acomodados de la población, que son los únicos con acceso a la georeferenciación. En el resto de la sociedad el acatamiento es moderado e incluso, en algunos sectores, nulo.

El confinamiento general comenzó el 22 de marzo. Debía durar 14 días. Ha sido luego prolongado hasta el 15 de abril, y se espera que haya nuevas ampliaciones. La presidenta Áñez ha declarado el “estado de emergencia sanitaria” y ha cerrado completamente las fronteras. Durante la cuarentena, los vehículos no pueden circular y cada persona tiene asignado un solo día para salir de su casa a provisionarse. El Ejército y la Policía están movilizados y cada día se producen decenas de detenciones de infractores. Ha habido denuncias sobre abusos por parte de los uniformados. Al mismo tiempo, el contagio de algunos militares está llevando a que ciertos regimientos decidan “replegarse” a sus cuarteles.

Una versión incluso más restrictiva de las medidas nacionales de confi-

namiento se ha aplicado en la región de Oruro, que se ha hecho nacionalmente famosa por haber logrado contener un brote inicial de ocho casos simultáneos.

Dos semanas después de iniciarse, la cuarentena se ha hecho más difícil de sostener. La prensa local publica crónicas de familias que vivían de pequeños negocios, como vender comida en la calle o plancharle la ropa a otras familias más acomodadas, y que han perdido estas fuentes de ingreso. Puesto que estas familias, por lo regular, carecen de ahorros, están sufriendo graves dificultades para comprar alimentos. También se han producido protestas en distintos puntos del país: grupos de vecinos marcharon sobrepasando a las fuerzas del orden: “El gobierno nos encierra, el hambre nos va a matar”, decía un cartel de una de estas marchas.

El gobierno ha aprobado la entrega de ayudas de 60 y 70 dólares a los mayores de 60 años, a las mujeres embarazadas, a los discapacitados y a los niños que cursan el ciclo educativo primario; una operación que ascenderá a unos 250 millones de dólares. También ha establecido descuentos en los servicios básicos, los cuales no pueden ser suspendidos durante la cuarentena.

Inicialmente, las autoridades pensaron en entregar alimentos a las familias más vulnerables, pero las dificul-

tades logísticas las han llevado a desestimar esta idea y a repartir dinero en efectivo a los grupos sociales que ya habían enlistado previamente para otros propósitos. Han aplicado así un procedimiento más sencillo, pero que ha dejado fuera a muchas familias pobres. Otras medidas adoptadas por el gobierno, como la postergación del pago de créditos e impuestos, beneficiarán principalmente a los trabajadores formales, que solo constituyen un 30% de la fuerza laboral del país.

El gobierno quiere mejorar el apoyo financiero que está dando, sobre todo para asegurarse un mejor cumplimiento de la cuarentena en un momento en el que no le es posible confiar en la idoneidad de la respuesta sanitaria, pero —como se ha indicado— carece de “espacio fiscal” para eso. Sobre ello también ha influido la ideología de algunos de los dirigentes del oficialismo, que, pese al descomunal tamaño y al carácter imprevisible de la crisis, consideran prioritario mantener el equilibrio fiscal y no causar inflación.

Un sondeo de la empresa Captura Consulting, realizado a fines de marzo, encontró que el 57% de los bolivianos no creía que sus ahorros le alcanzarían para cubrir toda la cuarentena, incluso si esta no se prolongase. Este sondeo también detectó que, a diferencia de lo que ocurría en países más avanzados, únicamente estaban haciendo teletrabajo los bolivianos que pertenecían al nivel so-

cioeconómico alto (Contacto Económico, 2020).

En las redes sociales, dominadas por internautas de clase media, se ha culpado de las protestas contra la cuarentena al MAS, cuya fuerza proviene del apoyo de los sectores populares y más vulnerables de la población. Insultos como “salvajes”, “bestias” e “ignorantes que nos ponen en riesgo a todos” han sido usados intensamente para atacar a quienes desacataban la cuarentena. El MAS ha emitido un comunicado para lamentar que “algunas personas inescrupulosas estén impulsando campañas de mentiras y desprestigio”. También ha rechazado “los prejuicios racistas” de los comentarios en las redes, asegurando que las protestas eran espontáneas y no habían sido incitadas por el partido.

Durante este tiempo se ha insistido mucho en la necesidad de ofrecer un “frente unido” contra la enfermedad. Pues bien, este no se ha dado en Bolivia. Aunque la mayoría de la población, por miedo a la enfermedad, haya estado obedeciendo a Añez y reconociéndole el derecho a tomar medidas de un costo social inaudito, la polarización política que había en el país no ha desaparecido. En estas condiciones, es probable que las fallas estatales en el combate a la epidemia, y las presiones propias de una situación como la que se vive, no sean interpretadas ni procesadas de manera consensual por la población.

La magnitud del conflicto social que estas fallas puedan causar dependerá de la intensidad y duración de la epidemia.

Solo la sombra de un Estado

La sociedad boliviana es muy fuerte, en tanto que el Estado, entendido como aparato burocrático encargado del “bien general” —según la clásica definición weberiana—, y como red de instituciones a las que se les reconoce y permite el uso del poder legítimo, resulta muy débil (Zavaleta, 2011).

Es una sociedad fuerte porque está estrechamente organizada en un denso tejido de relaciones interpersonales y corporativas; en “grupos de interés” que hoy se manifiestan frente a la epidemia como siempre lo han hecho: para precautelar sus propios asuntos. En particular, así lo hacen las organizaciones médicas y sanitarias, que defienden a sus afiliados de la onerosa tarea que estos deberían cumplir: atender a la población contagiada con el coronavirus.

Esto es posible porque, simultáneamente, el Estado brilla por su ausencia (el Estado entendido hegelianamente, como la manifestación del espíritu trascendente y, por tanto, como sujeto desinteresado y general). Su debilidad y precariedad está determinada por la desembozada fortaleza de las corporaciones bolivianas. A lo largo de la historia, estas han logrado despojarlo de todo con-

tenido no corporativo o de proyección general: lo han vaciado (o fagocitado) para aprovecharse mejor de él.

Causalidad histórica: una élite que buscaba encerrarse en un gueto en lugar de tratar de estructurar la sociedad en la que vivía, se ha reducido a la condición mezquina de grupo corporativo y, así, solo ha sido capaz de crear un Estado igualmente corporativo. Las contraélites, por su parte, cantaron loas al “Estado fuerte”, pero cuando llegaron a gobernar impulsaron a la sociedad contra el Estado, y permitieron que la primera parasitara al segundo, como exigía la verdadera correlación de fuerzas en la que debían actuar. Incluso cuando agrandaron al Estado, lo hicieron para ponerlo al servicio de la sociedad (del partido, del grupo económico, del sindicato) y no para independizarlo de ella.

Hay que darle a Hegel la parte de razón que le corresponde. Cuando el (verdadero) Estado nace, es una valiosa fuerza civilizadora. El Estado es la única maquinaria capaz de llevar a la práctica las ideas, las aspiraciones, la ciencia constructiva y la voluntad de enmienda de los seres humanos. Es su instrumento de libertad (aunque en ocasiones también pueda ser, reverso siniestro, la garantía de su opresión). La vida en una sociedad sin un Estado real es posible. Pero es una vida peligrosa, según nos muestra el desesperado momento por el

que pasa Bolivia. Sin Estado —sustuvieron Thomas Hobbes y John Locke—, viene el “estado de guerra (civil)”. Sin Estado, todos pueden hacer todo, pero no se puede “hacer el todo”. Sin Estado, no solo el rey anda sin ropa; todos estamos desnudos.

Fernando Molina es periodista y escritor. Autor de varios libros sobre Bolivia, en especial sobre su historia intelectual y su historia contemporánea. Los más importantes son El pensamiento boliviano sobre los recursos naturales (Pulso, 2009), e Historia contemporánea de Bolivia (Gente de Blanco, 2016). Ha escrito numerosos artículos sobre política, economía y cultura bolivianas en medios de La Paz, Santa Cruz, Buenos Aires, Santiago de Chile y México. Algunos de ellos han sido traducidos al francés y al inglés. Desde principios de 2015 es colaborador del diario madrileño El País. En 2012 obtuvo el Premio Rey de España de Periodismo Iberoamericano.

Referencias bibliográficas

AGUILAR W. (2020): “Encuesta: aprueban la gestión de Áñez, pero rechazan candidatura”, *Los Tiempos* (21/1/2020). Disponible en: <https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200126/encuesta-aprueban-gestion-anez-pero-rechazan-candidatura>.

CONTACTO ECONÓMICO (2020): “Encuesta: El 57% cree que agotará sus ahorros en 30 días de cuarentena y el 78% teme una catástrofe económica”, *Contacto Económico* (3/4/2020). Disponible en: <http://contactoeconomico.com/2020/04/03/encuesta-el-57-cree-que-agotara-sus-ahorros-en-30-dias-de-cuarentena-y-el-78-teme-una-catastrofe-economica>.

MARSTEINTREDET L. y MALAMUD A. (2020): “Golpes con adjetivos: ¿Precisión o confusión?”, *Análisis Carolina*, 5/2020, Madrid, Fundación Carolina. Disponible en: <https://www.fundacioncarolina.es/estudios-y-analisis/publicaciones/analisis-carolina>.

MOLINA, F. (2020): “Bolivia: un nuevo bloque de poder”,

- Nueva Sociedad* (enero 2020). Disponible en: <https://www.nuso.org/articulo/Bolivia-derecha-Evo-Morales>.
- ORTIZ, P. (2020): “Encuesta: la mayoría de la población aprueba la gestión de la crisis del Covid-19, pero se está quedando sin recursos”, *El Deber* (3/4/2020). Disponible en: https://eldeber.com.bo/172598_encuesta-la-mayoria-de-la-poblacion-aprueba-la-gestion-de-la-crisis-del-covid-19-pero-se-esta-quedan.
- SALTALAMACCHIA, N. (2020): “La OEA en la elección presidencial de Bolivia: problemas de credibilidad”, *Análisis Carolina* 13/2020, Madrid, Fundación Carolina. Disponible en: <http://www.fundacioncarolina.es/wp-content/uploads/2020/04/AC-13.2020.pdf>.
- STEFANONI, P. y MOLINA, F. (2019): “¿Cómo derrocaron a Evo Morales?”, *Revista Anfibia* (11/11/2019). Disponible en: revistaanfibia.com/ensayo/como-derrocaron-a-evo.
- TOLOSA, G. (2020): *EM Coronavirus rankings – bad for all, awful for some*, Oxford Economics. Disponible en: <http://blog.oxfordeconomics.com/coronavirus/em-coronavirus-rankings-bad-for-all-awful-for-some>.
- ZAVALETA, R. (2011): *Obra completa. Tomo II*, La Paz, Plural Editores.

Fundación Carolina, abril 2020

Fundación Carolina
C/ Serrano Galvache, 26.
Torre Sur, 3ª planta
28071 Madrid - España
www.fundacioncarolina.es
@Red_Carolina

ISSN: 2695-4362
https://doi.org/10.33960/AC_15.2020

La Fundación Carolina no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los textos firmados por los autores y autoras que publica.



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)